Globethics Repository



La presidencia imperial en México
[The imperial presidency in Mexico]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Saxe Fernández, John
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-19 10:55:28
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/218847

La presidencia imperial en México

Globalización y seguridad

John Saxe-Fernández

El trabajo centra su atención en la proyección del poder imperial de Estados Unidos en México. Este es un asunto con una pauta imperialista clara que emerge de acontecimientos y procesos desde principios del siglo XIX hasta las más recientes manifestaciones del imperialismo de EEUU. Un tema central de este proceso es la necesidad y los esfuerzos del gobierno estadounidense (la «presidencia imperial») por reconciliar los imperativos en conflicto del poderío económico, proyectado por las corporaciones multinacionales locales, y los imperativos políticos para impulsar la estabilidad y el orden. En el trabajo se analizan las consecuencias para México de los esfuerzos de la «presidencia imperial» para resolver este dilema.

Este texto aborda la globalización y la seguridad desde una perspectiva teórica e histórica, haciendo referencia a los procesos centrífugos generados en el marco del desarrollo e impacto del capitalismo estadounidense sobre México. Aborda las fuerzas centrípetas involucradas en este proceso que derivan de la centralización del poder policial-militar y de inteligencia en el Ejecutivo estadounidense, que se configuró históricamente a lo largo de los

Nota: Una primera versión de este trabajo fue presentada ante el Congreso de las Ciencias Sociales de Canadá, 29 mayo - 1º de junio de 2002; el autor agradece la traducción realizada por Ruth Valdés, Carlos Valdés y Luis Arizmendi.
John Saxe-Fernández: editor consejero del *International Journal of Politics, Culture and Society*, Nueva York; coordinador del programa El Mundo Actual, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM, México; autor de *La compra/venta de México* (Plaza y Janés, México, 2002); con Gian Carlo Delgado: *Banco Mundial y desnacionalización* (UNAM / Ceiich, México, 2003); y con James Petras: *Globalización, imperialismo y clase social* (Lumen / Humanitas, Buenos Aires, 2001).
Palabras clave: imperialismo, globalización, dependencia, Estados Unidos, México.

últimos dos siglos –un poder usado para manejar la propensión del capital, que en su búsqueda de oportunidades y ganancias, desgarra y desestabiliza el medio social dentro del cual actúa. Como se describe más adelante, este poder presidencial se proyecta interna e internacionalmente. El impacto del expansionismo y del llamado «destino manifiesto» sobre la política y el sistema constitucional estadounidense ha sido enorme. De hecho, según interpretación de algunos analistas, ha conducido a una *presidencia imperial* que usurpa funciones legislativas y judiciales, erosionando la democracia en ese proceso[1]. Desde la compra de Louisiana, en 1803, hasta el presente, muchos presidentes de Estados Unidos simplemente han ignorado al Congreso cuando se les opone. Mediante el control de la política exterior y, normalmente, mediante acciones encubiertas, han tendido a sustraer poder al Legislativo ampliando el del Ejecutivo. La diplomacia secreta –y lo que ahora se conoce como «operaciones encubiertas» (*black operations*)– para manipular al Congreso y la opinión pública se han usado frecuentemente, como en los casos del presidente Polk en el proceso que condujo a la guerra con México; de Franklin Roosevelt cuando implementó varios acuerdos Ejecutivo-Legislativo con el objetivo de eludir las restricciones constitucionales para la formalización de tratados; de Lyndon Johnson en sus operaciones secretas para obtener poderes bélicos mediante la Resolución de Bahía de Tonkín en agosto de 1964; y, más recientemente, de George W. Bush al utilizar los poderes de la guerra «antiterrorista», creados después del 11 de Septiembre, para socavar las libertades civiles, instaurar tribunales militares secretos y desestabilizar las relaciones civiles-militares –como ejemplifica su solicitud al Congreso de modificar la Ley Posse Comitatus de 1878, que no permite la acción de militares dentro de EEUU.

En este artículo analizo cómo estas dos fuerzas –la centrífuga y la centrípeta, es decir, la económica y la policial-militar– interactúan en el contexto de lo que Schlesinger denominó la «presidencia imperial» y las formas con que opera en México. Hago una breve referencia al porfiriato, pero me concentro principalmente en la descripción de algunas consecuencias traumáticas del programa de ajuste estructural del Banco Mundial, sobre el campesinado mexicano y su impacto sociopolítico, que se refleja en la rebelión de Chiapas. Se señala el impacto de esta «presidencia» en la arena interna de EEUU, particularmente en materia constitucional.

1. Para una descripción de las operaciones secretas del Ejecutivo para manipular y socavar las prerrogativas del Congreso en las relaciones exteriores, v. La Feber 1987; Schlesinger; y Zinn.

El poder imperial de Estados Unidos en México: aquellos tiempos y ahora

La tesis principal de este escrito se centra en la siguiente noción:

> Los estadounidenses, que frecuentemente son vistos como contrarrevolucionarios fervientes, actuaron como catalizadores de revoluciones cuando buscaron oportunidades económicas y la realización de sus objetivos alrededor del mundo; así que, de buena gana, sacrificaron el orden en aras de la oportunidad, generando una nueva presidencia que surgió con su imperialismo. Con ella, la principal función del Presidente en asuntos exteriores se convirtió en el uso de sus poderes constitucionales como «comandante en jefe» para emplear la fuerza, cuando fuera necesario, con el objetivo de restaurar un orden que permita que las oportunidades puedan perseguirse de nuevo (La Feber 1995, p. xiii).

Las formas mediante las cuales el imperialismo de EEUU ha tratado de resolver la que se presenta como una contradicción irreconciliable entre la presión desestabilizadora de sus agentes económicos (las corporaciones multinacionales)[2] y la intercesión de su política exterior dirigida a fomentar la estabilidad y el orden, se centran en el recurso de las intervenciones policial-militares para enfrentar las reiteradas explosiones sociopolíticas. Este patrón incrementó su frecuencia con el crecimiento espectacular del capitalismo estadounidense después de la Guerra Civil cuando, en muchas industrias, el capitalismo monopólico –y gerencial– reemplazó a las empresas familiares. Grandes monopolios crecieron y dominaron la mayoría de los sectores de la economía de EEUU. Como Chandler señaló (p. 11), esos monopolios crecientes alteraron la estructura básica de esos sectores y de la economía en su conjunto controlando

> … el mercado con la coordinación e integración del flujo de bienes y servicios, desde la producción de las materias primas y su paso por los diversos procesos productivos hasta su venta al consumidor final. Cuando lo logran, la producción y la distribución se concentran en manos de unas cuantas grandes empresas.

Así, *la mano visible del poder monopólico*, mediante sus estructuras de propiedad y directivas, niega toda credibilidad a la noción de *mano invisible de las fuerzas del mercado*, justo con la cual, siguiendo la retórica imperial británica del libre comercio, se promovió el expansionismo empresarial estadounidense. Como señaló Bismarck refiriéndose a Inglaterra: «El libre comercio es la doctrina favorita de la potencia dominante, pero teme que otros puedan seguir su ejemplo». Su expresión imperialista más importante puede encontrarse en la creciente simbiosis del poder estatal y los intereses corporativos. Al

2. Por *corporación multinacional* me refiero a empresas nacionales (en este caso, con base en EEUU) que operan internacionalmente.

final del siglo XIX, la coordinación de la política exterior estadounidense y los intereses privados nacionales se volvió más intensa y extensa. La expansión de EEUU en ultramar estuvo completamente enfocada hacia los mercados y se dirigió a todos los rincones del mundo, bajo los impulsos emanados de la relación de su política exterior con la dinámica y necesidades del capitalismo monopolista. Desde una perspectiva teórica y global, Paul Sweezy, Harry Magdoff y particularmente, Iztván Mészáros han identificado las tendencias contradictorias del capitalismo hacia una gran sobreacumulación como una de sus más importantes dimensiones que afecta directamente la relación entre sus estructuras de mando económicas y políticas. De acuerdo con Mészáros, «la contradicción entre Estados nacionales rivales del sistema capitalista y la conducción problemática de sus más poderosas unidades económicas –las corporaciones gigantes– lleva hacia el monopolio transnacional como la más clara manifestación de la sobreacumulación» (p. 170). Esta proposición teórica es crucial. Si se toman en cuenta las actuales tendencias hacia la formación de bloques económicos, monetarios y geopolíticos, así como el uso creciente de Washington del unilateralismo político-militar y del proteccionismo económico, las concesiones masivas de México en la desregulación del comercio exterior –sin reciprocidad– y la inversión directa, formalizada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), constituyen la base para establecer un área de «anexionismo comercial, monetario, financiero y militar hemisférico» mediante el «Acuerdo de Libre Comercio de las Américas» (ALCA) y los programas con él relacionados, como el Plan Puebla-Panamá (PPP) y el Plan Colombia (PC). Estos ALCA, PPP y PC están respaldados por una elaborada estructura de relaciones públicas que apenas oculta su intención real, es decir, la absorción de mano de obra barata, los mercados y las materias primas estratégicas (como petróleo, gas natural, minerales, agua y el control de enormes áreas de biodiversidad) de América Latina, que forman parte del arsenal de instrumentos usados por el gobierno de EEUU para enfrentar una economía mundial crecientemente fragmentada y competitiva.

A lo largo de los últimos 140 años, en toda América la aplicación de la Doctrina Monroe ha conducido a proveer protección estatal a las inversiones y el comercio de EEUU. Las necesidades de firme desarrollo del sistema industrial y agrícola –que se basa en el proteccionismo y se encuentra plagado de sobreproducción– fueron y son la raíz de la promoción estadounidense de los tratados de libre comercio. Esta importante característica estructural fue determinante en el siglo XIX y, asimismo, al final del siglo XX, como condición esencial de acuerdos como el Tlcan y el ALCA, y también de las acciones hemisféricas y globales de la diplomacia económica y militar estadouniden-

se[3]. El antiguo secretario de Estado James G. Blaine describió la política económica de EEUU hacia América Latina como sigue:

> Quiero decir que EEUU ha llegado a un punto en que su mayor obligación es ampliar su área de comercio exterior. Bajo la política benefactora de (tarifas) protectoras hemos desarrollado un volumen de manufacturas que, en muchas ramas, sobrepasa la demanda del mercado nacional. En el campo de la agricultura, con el inmenso impulso dado por las tecnologías agrícolas, podemos hacer mucho más que producir cereales y provisiones para nuestro propio pueblo. ... Nuestra gran demanda es la expansión. Esto significa la expansión del comercio con países donde podemos lograr intercambios lucrativos. No buscamos anexiones de territorio. Pero, pienso que seríamos imprudentemente complacientes si no nos comprometemos a perseguir lo que el joven Pitt bien llamó la anexión comercial (La Feber 1987, p. 165).

El interés de Blaine en América Latina y su idea de persuadir a los vecinos hemisféricos a aceptar una relación de «hermano mayor» estuvieron regidos por motivos económicos. Blaine era un gran empresario republicano. Naturalmente, estaba preocupado por la balanza comercial adversa de EEUU con América Latina, una región que, a la par que le embarcaba enormes cantidades de materias primas, traía el grueso de sus bienes manufacturados de Europa (Bailey, p. 399). Como hoy, la rivalidad intercapitalista fue el corazón de los acuerdos hemisféricos de libre comercio. El objetivo de Blaine, escribió Bailey, «era sacar a codazos a los competidores foráneos mediante la formación de lazos comerciales estrechos al sur de la frontera. Y ya que las relaciones económicas no podían florecer entre el silbido de las balas, Washington usó sus buenos oficios para terminar con las guerras en América Latina» (p. 399).

---

3. Sobre mi posición en torno de este fenómeno refiero al lector a un artículo de Guerra-Borges (p. 50), donde hace mención, de paso, a un trabajo mío, señalando que «para algunos autores la globalización es internacionalización del capital o simplemente del capitalismo. Para otros es equivalente a interdependencia económica» (Saxe-Fernández 1999). No capto por qué deriva eso de mi texto, si precisamente la tesis central es que el «imperialismo es el marco de referencia de dominación en el que ocurre la globalización», subtítulo inicial de un texto que introduce los estudios de varios autores, como Vilas, Glyn y Sutcliffe y Petras entre otros. Allí sostengo que la globalización es un concepto cuyo referente histórico y empírico está centrado en el largo proceso multisecular de la internacionalización económica que se observa en el periodo posrenacentista. Es un fenómeno que adquirió gran fuerza después de la segunda mitad del siglo XIX como resultado de la segunda revolución industrial y la multiplicación de grandes unidades empresariales de base nacional que, con los antecedentes de las compañías mercantiles de siglos anteriores, empezaron a operar internacionalmente. Es un proceso «…que tiene en la experiencia colonial e imperial una de sus más claras expresiones históricas y contemporáneas». Por tanto, lejos de considerar adecuado el concepto de «interdependencia», por su debilidad analítica, enfatizo el de imperialismo, centrado en el fenómeno de la dominación y de la explotación. A lo largo del texto insisto en una categorización opuesta a la de «interdependencia», que implica la existencia de beneficios compartidos de las economías de las naciones y el carácter mutuo de sus intereses y desestima las asimetrías. Propongo que el presente estadio del capitalismo no muestra rupturas fundamentales con la experiencia del pasado en lo que se refiere al asimétrico contexto de poder internacional y nacional en el que ocurren los flujos comerciales, de inversión, y las transferencias de tecnología y de esquemas productivos.

Esto es de particular relevancia cuando analizamos las formas con que las fuerzas centrífugas del capitalismo estadounidense se relacionan con los poderes centrípetos concedidos a la presidencia imperial y cómo se han vinculado entre sí desde el pasado hasta el presente, por ejemplo, garantizando al presidente el poder del «*fast track*» (vía rápida) para negociar «acuerdos comerciales». Desde los años de 1870, por ejemplo, el dictador mexicano Porfirio Díaz abrió el país al libre comercio y 1a inversión extranjera, haciendo a México dependiente de EEUU. Entre 1903 y 1910, las inversiones se dispararon tres veces respecto de 1876-1900. Para 1910, 43% de la riqueza de México era propiedad de inversionistas de EEUU, 33% de 15 millones de mexicanos, y 24% de otros capitalistas extranjeros (La Feber 1995). Las inversiones se concentraron en petróleo, plata, otras concesiones mineras y enormes plantaciones para agricultura de exportación. En 1905, James Speyer, prominente banquero estadounidense, dijo al embajador de Alemania en México que: «En EEUU existe un profundo sentimiento de que México ya no puede ser más que un país dependiente de la economía estadounidense» (ibíd., p. 221). A medida que la masiva inversión extranjera transformaba a México y las haciendas se convertían en cultivos de exportación, proliferaban los campesinos sin tierra y caía la producción de alimentos básicos. En 1910, el país estaba más modernizado que en 1876, pero tenía menos maíz y frijol para consumo doméstico. Bajo el gobierno de Díaz las fuerzas centrífugas del capitalismo de EEUU habían dañado el tejido social. Los estadounidenses construyeron ferrocarriles para transportar los bienes hasta los puertos, pero también penetraron y amenazaron la vida de las comunidades. Las políticas de libremercado y las aplicadas al sector rural despojaron de sus tierras a unas 5.000 comunidades y se estima que cerca de un millón de familias perdieron su patrimonio. En 1910 menos de 3.000 familias poseían cerca de la mitad de la tierra apta para cultivos, mientras 95% de la población rural no poseía ni un palmo del territorio. Casi la mitad de esta población vivía y trabajaba en formas de cruel semiesclavitud, en las haciendas, que cubrían cerca de 80% de las comunidades rurales. Algunas de estas haciendas abarcaban cientos de miles de hectáreas[4]. Estamos haciendo referencia a unos 5 millones de peones, es decir, cerca de la tercera parte de la población mexicana de entonces (Turner). En 1910, el país estalló en ciclos de guerras civiles, que duraron siete años y costaron 1,2 millones de vidas de una población de 15 millones. Para 1916 se habían producido frecuentes intervenciones militares de EEUU en México. Incluso el presidente Wilson ordenó el bombardeo naval

4. Una síntesis sobre las condiciones infrahumanas en que vivió el campesinado mexicano es ofrecida por Rummel, uno de los más puntuales trabajos en los que se describe, entre otros, el «democidio» del porfiriato; cons. tb. Feherenbach; Knight.

de Veracruz. Las fuerzas centrípetas de la presidencia imperial actuaron con diferentes instrumentos de naturaleza militar, diplomáticos y de inteligencia.

Las consecuencias sociales y políticas de la política porfiriana de *laissez-faire* fueron traumáticas. Las desregulaciones del comercio, la inversión y la banca, similares a la agenda económica actual, colapsaron bajo las fuerzas internas y externas. En esa época –como sucede hoy de manera creciente, según lo demuestra el colapso financiero de diciembre de 1994– la dependencia mexicana de liquidez del sistema internacional creó serias vulnerabilidades: «El pánico estadounidense de 1907 mostró el precio de la dependencia del vecino gigante del Norte. Como el capital de Nueva York colapsó, las exportaciones mexicanas cayeron, las inversiones desaparecieron, miles de emigrantes mexicanos en EEUU súbitamente empezaron a regresar y se difundió la inquietud» (Turner, p. 222). La experiencia histórica del porfiriato con la codicia de los negocios estadounidenses y su presión desestabilizadora constituye un importante precedente cuando abordamos las tendencias actuales. En ambos casos, la estrategia económica llevó la estabilidad social y política hasta sus límites. Las consecuencias sociales, políticas y militares de los programas de ajuste estructural y los paquetes de privatización y desregulación patrocinados en México por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han sido, y están siendo, implementados con el consentimiento del gobierno mexicano[5]. Bajo esta política, a la que me referiré como neoporfiriato[6], el gobierno de México está siendo tratado como si fuera parte de EEUU. Sus características básicas se centran en la apertura unilateral del mercado nacional, la privatización de algunos de los sectores más importantes de la economía –mediante un proceso diseñado para socializar costos y privatizar beneficios–, toda clase de modificaciones constitucionales formuladas para ajustar el país a los intereses extranjeros, la transformación de México en un paraíso exclusivo para los inversionistas de EEUU y Canadá por medio del Tlcan y la aplicación de los programas de ajuste estructural en el campo. Después de escuchar la presentación principal del programa de privatización y la nueva Ley de Inversión Extranjera, patrocinada por el BM durante el gobier-

5. El BM y el FMI, en este ensayo, son vistos como instrumentos estatales y de clase de los intereses nacionales privados de EEUU –no solo como instituciones financieras internacionales o como instrumentos financieros multilaterales–, y, asimismo, como herramientas vitales de la *pax americana*. Para un detallado análisis histórico véase Kolko/Kolko.

6. Es un concepto que define más claramente las características actuales de la política económica y la política en contraste con la más conocida etiqueta de neoliberalismo. En el siglo XIX mexicano el liberalismo adoptó importantes tendencias positivas en áreas vitales como la relación Estado-Iglesia y promovió la secularización de la educación. En este sentido, el concepto de neoliberalismo no es históricamente adecuado. Este ensayo está basado en un escrito previo de investigación (Saxe-Fernández 1994).

no de Salinas, un empresario estadounidense expresó su satisfacción llamando al régimen de Salinas «la mejor cosa que nos ha sucedido desde que López de Santana vendió más de la mitad del territorio mexicano a Estados Unidos».

Los programas de ajuste estructural patrocinados por el FMI y el BM están en el centro de las políticas del neoporfiriato, que son la principal causa inmediata de la insurrección en Chiapas. Existe un consenso virtual entre los analistas mexicanos y varios extranjeros de que estos programas constituyen el principal detonante de la guerra interna, no solamente en Chiapas sino también de otras explosiones sociopolíticas rurales y urbanas en otros estados, así como en otras partes de América Latina. El levantamiento social en Chiapas tiene profundas raíces en una historia colonial de violencia, despojo y humillaciones sufridas por los indígenas nativos, y estos agravios no fueron atendidos ni modificados en ningún sentido vital por la Revolución mexicana. Como es bien sabido, la política en general y en particular la política económica de los gobiernos revolucionarios favoreció a los propietarios de tierras, ganaderos y a los explotadores de los bosques. Una brutal coalición de esos grupos basados en la explotación política y las inequidades del caciquismo, la estructura de poder de los jefes locales, era y sigue siendo el orden dominante en Chiapas. Las estructuras agraria y social derivadas de la modernización capitalista benefició a un pequeño grupo y proletarizó a enormes cantidades de campesinos en ese estado y por todo México, como describe y analiza Calva. De acuerdo con una investigación realizada por el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, en 1989, 64,7% de los campesinos de Chiapas eran jornaleros (trabajadores por día), 28,4% abyectamente pobres, y solo 6,9% estaba relativamente acomodado. Fue durante las décadas de los 60 y 70 que principalmente se produjo esa «jornalerización», aunque los campesinos rehusaron recurrir al conflicto armado para solucionar sus penurias. Las condiciones generales para la frustración social han estado presentes durante un largo tiempo, pero los eventos que realmente dispararon la rebelión en Chiapas deben localizarse en los programas del FMI y BM, particularmente en sus esquemas de «modernización» del sector agrícola de México. El paquete de ajustes de reducción del gasto público, canalizando los recursos gubernamentales y privados hacia el pago de las deudas externas, y el control de los salarios para reducir la inflación e incrementar la competitividad internacional de los productos mexicanos, ha tenido efectos devastadores en el pueblo mexicano. Estas políticas iniciaron el camino descendente de los ingresos reales. Las fuentes del BM corroboran que en México los salarios reales han caído sustancialmente durante las décadas de 1980 y 1990, y que el declive ha sido mayor en el sector agrícola. Para 1989 se estimó que entre 60% y 80% de la

población padeció una situación casi tan desesperada como la del Subsahara africano o Bangladesh. La caída de los ingresos reales ha afectado a las clases de bajos ingresos y medias. La «proletarización» de la clase media se ha vuelto incluso más aguda, lo que evoca las ominosas advertencias derivadas de los descubrimientos de Crane Brinton en su *Anatomy of Revolution*, referidos a que un serio deterioro de la posición de la clase media parece ser la cuestión recurrente en las revoluciones inglesa (cromwelliana), estadounidense, francesa y rusa. Resulta claro que este desarrollo no se restringe a México.

En el caso de Chiapas (Saxe-Fernández 2002), el descenso del salario real fue más devastador debido a la alta proporción de jornaleros. Cuando el salario mínimo se redujo dramáticamente, representó una baja inaceptable del nivel de vida de 64,7% de los campesinos. Con relación al nivel de vida de 1979, el programa de ajuste estructural del FMI-BM redujo el salario real en 60%. Según Calva, las políticas altamente recesivas implementadas de 1983 en adelante, el colapso de los precios del café y la apertura unilateral del mercado nacional, generaron un crecimiento enorme del desempleo. Como resultado, una gran proporción (38,8%) de la población agrícola de Chiapas vio reducidos sus ingresos a 50% del salario mínimo, menos de 1,74 dólares al día; otro 36,6% de los empleados del sector agropecuario recibían entre 1,74 y 3,48 dólares diarios. En contraste con la altamente subsidiada agricultura de EEUU, los préstamos del BM al sector agrícola, mediante el condicionamiento de programas implementados por el gobierno mexicano, abrieron el camino a las exportaciones de granos estadounidenses y la agroindustria con la eliminación en México de los subsidios a campesinos y pequeños granjeros, así como de los mecanismos de control de precios y precios de garantía para las cosechas, creando la mayor crisis de la agricultura local desde la Revolución de 1910. Los pequeños productores ahora enfrentan la competencia de las importaciones baratas de EEUU, que reciben subsidios masivos para los granos básicos, como el maíz, mientras las inversiones públicas nacionales están siendo drásticamente cortadas. En 1982, la inversión pública en la agricultura (en forma de créditos subsidiados, transferencias fiscales y otras inversiones públicas) fue de 2,5% del PNB. En 1991, bajo la fuerte presión y préstamos del BM, esta inversión había caído a 0,7%. Chiapas es un síntoma de una condición generalizada que afecta al tejido de la sociedad mexicana, porque los principales factores que llevaron a la rebelión zapatista están presentes en todo el país. Carlos Montemayor, destacado analista de los movimientos guerrilleros, estudiando algunas de las características antropológicas más importantes de la estructura social de Chiapas, caracteriza al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) como la punta del iceberg de la inquietud y la rebelión popular.

Las precondiciones para la guerra interna no se restringen a Chiapas. La frustración de las aspiraciones sociales, políticas y económicas constituye una característica general del panorama mexicano actual, a la vez que la llamada «modernización económica», implementada bajo el impacto de toda clase de préstamos del BM y del BID, opera como el principal detonador de conflictos sociales en el país. El concepto de «privación relativa» (*relative privation*) ofrece una herramienta esencial para cualquier diagnóstico nacional y, ciertamente, también bilateral, de los orígenes de la insurrección *zapatista*. Esto es, no es la pobreza absoluta el principal detonante de la guerra interna, sino las percepciones sociales respecto a la discrepancia existente entre las expectativas de valor y las capacidades de valor de una comunidad. «Las expectativas de valor corresponden a los bienes y condiciones de vida en torno de los cuales la gente piensa que tiene un legítimo derecho. Mientras que las capacidades de valor se refieren a los bienes y condiciones que piensan son capaces de conseguir y conservar» (Gurr, p. 24). Es en este sentido que la situación de Chiapas revela un problema más profundo: la privación (*deprivation*) relativa puede incluso ser mayor en estados como Chihuahua o Coahuila, que tienen niveles de vida más altos y, en consecuencia, enfrentan desigualdades relativamente mayores. Hay indicios crecientes de que ese es el caso. Existe la percepción muy extendida de que la distribución regresiva del ingreso conforma una característica esencial de las actuales políticas económicas. El programa para combatir la «pobreza extrema», básicamente diseñado por el BM, ha conducido a resultados que contradicen lo que se esperaba lograr. Esto es principalmente consecuencia del hecho de que fue incapaz de contrarrestar los efectos generalizados de su política de control de salarios, cuya contracción ha sido brutal. En el periodo 1970-1982, los salarios representaban 37,1% del PNB, mientras que en la década de 1990 cayeron a menos de 25%. Se estima que, entre 1983 y 1993, la pérdida de los asalariados mexicanos fue de 246.900 millones de dólares. Solo entre 1989 y 1993, años del periodo salinista, la pérdida se estima en 160.900 millones. Varios analistas clasifican las políticas de desarrollo por su correspondencia con alguno de los siguientes tipos: el desarrollo fragmentario tiende a concentrar la riqueza, a diferencia del desarrollo integral que tiende a promover la equidad económica. La política económica del neoporfiriato decididamente pertenece al primer tipo. Ha servido para concentrar la riqueza en medio del aumento absoluto de la pobreza; sin duda, ofrece la mejor receta para la violencia social, como lo fue durante el mandato de don Porfirio. La concentración actual ha alcanzado niveles difíciles de imaginar: 0,2% de la población –lo más encumbrado de la plutocracia mexicana– posee 51,1% de los activos del país[7]. Los gastos sociales se han recortado drásticamente; en 1980, eran de 3.200 millones de

dólares, y en 1981, último año de la administración López Portillo, ascendieron a 3.500 millones. De 1989 a 1993, bajo la «guía» del FMI-BM, se redujeron a 1.960 millones; mientras tanto, los programas regionales de combate a la pobreza en Chiapas sumaron 527,5 millones de dólares, cuando las pérdidas experimentadas por los ingresos salariales en el estado, de acuerdo con los cálculos de Calva, superaron los 3.000 millones[8].

No es accidental que la insurrección en Chiapas coincidiera con la aprobación oficial del Tlcan el 1º de enero de 1994. El vínculo entre ambos eventos se asocia con otros factores. Además de los problemas causados por la política de control de salarios del FMI-BM, Calva subraya la importancia de la crisis del mercado cafetalero, que afectó a 60.000 pequeños productores en ese estado. La crisis resultó –conforme a las políticas comerciales trazadas por el poder presidencial de EEUU– del rechazo del Acuerdo Internacional del Café por el gobierno de Salinas, que ajustándose a los requerimientos del Tlcan, aceptó que México no actuara con otros productores para restringir exportaciones e incidir en los precios internacionales:

> Pero la cláusula del café no era la única causa por la que los indígenas rechazaban el Tlcan, los campesinos ya estaban sufriendo los efectos de la liberalización comercial sobre los precios de otros artículos, como el colapso en los precios de la carne, el frijol de soya, el sorgo, el plátano y el cacao, que redujo aún más el ingreso campesino y precipitaron al conjunto del sector agrícola del país hacia un desastre (Calva, p. 30).

La inversión pública global en México cayó de 1981 a 1992 en 60,4%. Dicha inversión en el sector agropecuario fue especialmente golpeada por las políticas económicas del BM, mostrando una baja de 79,04% en el mismo periodo[9].

La presidencia imperial y la venganza de don Porfirio

Desde el Tlcan, los pequeños productores de todo México han enfrentado la competencia de importaciones baratas estadounidenses de alimentos básicos como el maíz, mientras los apoyos gubernamentales para los precios de los

7. En 1984, los ingresos del sector 10% más pobre de las familias mexicanas sumaban 1,72% del PNB; en 1989 declinó a 1,58% y en 1992 a solo 1,55%. En contraste, los ingresos del sector 10% más rico de la población incrementó su proporción del PNB de 32,77% en 1984 a 37,93% en 1989 y 38,16% en 1992; v Elvia Gutiérrez: «Retrocesos en la distribución de la riqueza durante la actual administración» en *El Financiero*, 11/2/94, p. 3. Los datos de la concentración de la riqueza en la plutocracia mexicana vienen del Banco de México y la Bolsa Mexicana de Valores; v. *La Jornada*, 14/2/94, p. 1.
8. Este tipo de inequidad es visible en la forma en que Chiapas –el estado más rico en términos de agua, recursos forestales y generación de electricidad– es discriminado fiscalmente por el Gobierno Federal.
9. Estos números fueron amablemente proporcionados por Calva el 1º de marzo de 1994. Las cifras están basadas en datos oficiales del presupuesto federal de 1980-1992, y todas las estimaciones están hechas en pesos de 1980.

granos han sido drásticamente recortados. Lo que ha sucedido en las últimas dos décadas en México ha sido denominado con propiedad por una revista semanal de amplia circulación en EEUU como la «venganza de don Porfirio», no solamente por el programa de privatizaciones masivas del BM, sino también por lo que constituye una completa contrarreforma agraria. La modificación por Salinas del Artículo 27 constitucional, considerada por el BM como uno de sus más importantes éxitos, formalmente finiquitó la reforma agraria y el proceso de redistribución de la tierra al eliminar el concepto de «propiedad social», dejando a los ejidatarios y pequeños campesinos a merced de las «fuerzas del mercado». Como consecuencia de nuevos resquicios legales, ha sucedido un incremento sustancial de latifundios y de propiedades de transnacionales, principalmente de base estadounidense, en la agroindustria. La eliminación del sistema ejidal en la agricultura y la sustitución en gran escala de la agricultura de cuasi-subsistencia, aún practicada en el campo, por los cultivos intensivos en capital orientados a las exportaciones comerciales, conforman una clara evidencia de los efectos desestabilizadores provocados por las fuerzas centrífugas del capitalismo de EEUU. El rápido desplazamiento de la población rural ha abultado el mercado laboral urbano, deprimiendo aún más los niveles salariales. Millones de campesinos están atestando las ciudades o moviéndose hacia el norte, incrementando la presión migratoria. Estas políticas sociales disruptivas causan una enorme tensión sobre el sector de servicios públicos, mientras socavan las estructuras sociales tradicionales. La explosividad social crea condiciones para la insurgencia rural. Esto llevó al BM, a través de los gobiernos de Salinas, Zedillo y Fox, a implementar Procampo (ahora combinado con un plan similar llamado Contigo), un programa de emergencia, en parte diseñado para llegar a los campesinos sitiados por problemas, pero que opera más bien para neutralizar los costos electorales de esas políticas regresivas a favor del PRI y ahora del PAN.

De acuerdo con un documento confidencial preparado por los analistas económicos que trabajaban para la Embajada de EEUU en México y filtrado a la prensa local, «Procampo fue diseñado para aliviar el dolor de los campesinos en esta transición a un mercado abierto ... la privatización del sector rural ha tenido abruptas y catastróficas consecuencias para la población rural mexicana», la cual, según el análisis, «tiene poca oportunidad de modernizarse de forma que pueda ser capaz de competir dentro del marco del Tlcan» (Domville). La dinámica de la presidencia imperial es evidente en este caso, porque el documento reconoce que la política rural del BM sostenida por Salinas «ha fomentado la inestabilidad social e incubado el movimiento guerrillero zapatista», pero hace notar que «en un año electoral el Gobierno tiene la obligación, al menos tempo-

ralmente, de aliviar los problemas rurales con vistas a mantener la ventaja electoral de la que tradicionalmente disfruta en las áreas rurales» (ibíd.). Hablando con un asistente del diputado Richard Gephart, quien visitó Chiapas a fines de 1994, una mujer indígena resumió el sentimiento de desesperanza prevaleciente entre la población rural: «Ellos nunca nos dieron nada, pero ahora, con los cambios constitucionales, nos quitaron la esperanza». Este reclamo hace eco de los formulados durante el porfiriato. Pero la política exterior de la presidencia imperial estadounidense, implementada por medio del neoporfiriato, se centra en intereses empresariales y regionales de corto plazo. Por ejemplo, el analista diplomático señaló que los exportadores de granos estadounidenses serán ampliamente beneficiados por los programas agrícolas del BM, ya que la incapacidad de esos esquemas para promover la producción local tiende a favorecer «una mayor importación de maíz y granos de EEUU en el corto plazo». Y ya que las limitaciones de los programas agrícolas del BM no capacitarían a México para cubrir la futura demanda de trigo, sorgo, soya, arroz y algodón, se estima que «a mediano y largo plazo, la demanda creciente de esos artículos será más grande que la capacidad nacional para producirlos, por tanto, las importaciones (provenientes de EEUU) se incrementarán correspondientemente» (ibíd.).

Las implicaciones para la seguridad nacional de una política que tiende a empujar a la emigración a millones de campesinos están siendo enfrentadas con un incremento sin precedentes en México de los presupuestos militares y policiales, y consecuentemente con programas estadounidenses de asistencia, entrenamiento y aprovisionamiento de tecnología militar para el control de la población urbana y rural, también sin precedentes. En términos de tecnología, por ejemplo, está el cañón de agua Textron, vehículo que transporta 11.500 kg y dispara 1.500 litros de agua con suficiente presión para noquear multitudes, además, del vehículo de control Cobra Crowd, así como miles de ametralladoras, helicópteros y otras armas y entrenamientos, usados tanto en la guerra contra las drogas como en la guerra contra el pueblo, lo que sin duda constituye una guerra de clases. Aquí tenemos a la presidencia imperial y al neoporfiriato actuando a toda plenitud.

Conclusiones

En una entrevista publicada en la prensa mexicana en mayo de 1994, el general James R. Harding anticipó muchos de los escenarios en relación con las estrategias «patrióticas» de la presidencia imperial después de los ataques terroristas del 11 de Septiembre; allí afirmó que «la inmigración ilegal mexi-

cana a EEUU puede clasificarse ahora, con el narcotráfico y el terrorismo internacional, como una gran amenaza a la seguridad nacional»[10]. Usando la guerra contra el terrorismo como excusa, el Departamento de Justicia de EEUU, encabezado por John Aschcroft, ha solicitado al Servicio de Inmigración y Naturalización desempolvar y poner en vigor una ley de hace 50 años que exige a los «no ciudadanos» reportar cualquier cambio de domicilio dentro de los 10 días posteriores a su realización. Incumplir esta medida podría dar como resultado la deportación. Esta política se aplica a los no ciudadanos, sin importar si están legal o ilegalmente residenciados en EEUU, implicando que los extranjeros están más predispuestos a cometer terrorismo que los nacionales (Navarrete, p. 13). De acuerdo con este autor, constituye un descarado exceso la deportación de quienes no reporten el cambio de domicilio, y al aislar a los no ciudadanos se refuerzan prejuicios y empuja a los emigrantes hacia la marginación. La administración Bush insiste que la nueva política «mejorará la seguridad fronteriza», pero nadie sabe cómo se logrará asediando a las personas que ya cruzaron la frontera. En el ambiente posterior al 11 de Septiembre, la desestabilización derivada de los programas del FMI-BM, combinada con los intereses estadounidenses encarnados por las corporaciones y la seguridad nacional, tienen profundas implicaciones negativas para las libertades civiles y las relaciones civiles-militares tanto en México como en EEUU.

El establecimiento de estructuras anticonstitucionales y del Estado policial «antiterrorista» que auspicia a escala mundial la presidencia imperial de EEUU tiene profundas repercusiones en México y Canadá, ya que su nueva estrategia afirma que la seguridad nacional únicamente puede alcanzarse mediante la colocación de unidades de vigilancia e inteligencia estadounidenses en los aeropuertos, muelles, ferrocarriles y autopistas de los países vecinos. El bienestar económico y político de la sociedad de EEUU se encuentra entretejido con la trampa de la seguridad económica y nacional que es generada por la cobertura financiera y militar de Washington, apoyada por el neoporfiriato mexicano. Las políticas y errores de cálculo estadounidenses están causando agitación, pero no en tierras lejanas como Vietnam, Chile o Argentina, sino en los vecinos más cercanos. Las calles de EEUU están en el otro extremo de la correa de transmisión que está erosionando la estructura del trabajo y del ingreso, así como los mismos fundamentos de la democracia y los derechos constitucionales en el contexto de los excesos autoritarios

10. En una entrevista con la reportera mexicana Dolia Extevez, el general Harding señaló la necesidad de «preparar las Fuerzas Armadas en América Latina para lidiar con cualquier amenaza a la seguridad (nacional y regional, esto es, de EEUU)» (*El Financiero*, 20/5/94, p. 44).

promovidos por la presidencia imperial, bajo la excusa de que EEUU es una nación actualmente en guerra contra el «terrorismo mundial». Esta es una guerra en la que cualquiera puede ser un terrorista en cualquier momento, un escenario difícil para toda oposición social y política legítima. El autoritarismo y militarismo imperiales estadounidenses se producen cuando se profundiza la crisis estructural capitalista. Esta situación genera costos sociales y económicos insoportables. En este contexto la fuerza de los movimientos sociales contra el sistema capitalista se debe incrementar, a fin de poner estrictos límites a la capacidad de la presidencia imperial para contener el cambio social a escala global.

Referencias

Bailey, T.A.: *A Diplomatic History of the American People*, Prentice, Nueva Jersey, 1980.
Calva, J.L.: *La disputa por la tierra*, Fontamara, México, 1993.
Chandler, A. Jr.: *The Visible Hand*, Harvard University Press, Cambridge, 1995.
Domville, L.: «Procampo, instrumento del TLC. EU el principal beneficiario» en *El Financiero*, 28/4/94.
Feherenbach, T.R.: *Fire and Blood: a History of Mexico*, Macmillan, Nueva York, 1973.
Guerra-Borges, A.: «Globalización: ordenar el debate y asignarle un imperativo ético» en *Nueva Sociedad* Nº 178, 3-4/2002, Caracas, pp. 39-54.
Gurr, T.R.: *Why Men Rebel*, Princeton University Press, Princeton, 1970.
Knight, A.: *The Mexican Revolution. Volume I, Porfirians, Liberals and Peasants*, Cambridge University Press, Cambridge, 1986.
Kolko, G. y J. Kolko: *The Limits of Power*, Harper & Row, Nueva York, 1972. Magdoff, H.: *Globatization: For What End?*, Monthly Review Press, Nueva York, 1992. La Feber, W.: *The American Age*, Norton & Norton, Nueva York, 1987.
La Feber, W.: *The American Search for Opportunity, 1865-1913*, Cambridge University Press, Nueva York, 1995.
Marcos, Sub Comandante: *Chiapas: El Sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía*, 1994, <http://www.ezln.org/documentos/1994/199208xx.es.htm>.
Mészáros, I.: *Beyond Capital*, Merlin Press, Londres, 1995.
Montemayor, C.: *La guerra en el paraíso*, Premiá, México, 1998.
Navarrete, R. Jr.: «US Government Must Stop Hiding Behind War» en *The News*, 30/7/2002.
Rummel, R.J.: *Death by Government*, Transaction Publishers, New Brunswick, 1996.
Saxe-Fernández, J.: «The Chiapas Insurrection: Consequences for Mexico and the United States» en *International Journal of Politics, Culture and Society* 8 (2), 1994.
Saxe-Fernández, J.: «Globalización e imperialismo», en J. Saxe-Fernández: *Globalización: crítica a un paradigma*, Plaza y Janés / UNAM, México, 1999.
Saxe-Fernández, J.: «El Banco Mundial y el FMI en México: El nuevo monroísmo» en J.L. Calva (ed.): *Política económica para el desarrollo sostenido con equidad*, Juan Pablos, México, 2002.
Saxe-Fernández J. y James Petras: *Globalización, imperialismo y clase social*, Lumen / Humanitas, Buenos Aires, 2001.
Schlesinger, A.: *The Imperial Presidency*, Houghton Miffin, Nueva York, 1973.
Sweezy, P.: «More (or Less) on Globalization» en *Monthly Review* vol. 49 Nº 4, 1997.
Turner, J.K.: *Barbarous Mexico*, University of Texas Press, Austin, 1969.
Zinn, H.: *A People's History of the United States*, Harper Perennial, Nueva York, 1990.